



Asamblea General

Distr. general
30 de julio de 2013
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

17º período de sesiones

Ginebra, 21 de octubre a 1 de noviembre de 2013

Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 y el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

República Popular China (incluidas las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao (RAEHK y RAEM))*

El presente informe constituye un resumen de 82 comunicaciones de interlocutores¹ para el examen periódico universal. El informe sigue las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, cuando procede se incluye una sección separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos ocurridos durante ese período.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. Información proporcionada por otros interlocutores

A. Antecedentes y marco

1. Alcance de las obligaciones internacionales²

1. La Academia China de Ciencias Sociales – Centro de Investigación sobre Derechos Humanos (CASS-HRRC) recomendó al Gobierno dedicarse activamente a crear las condiciones necesarias para una pronta ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³. La Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China (HKAA) recomendó a China ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el plazo de un año, con las mínimas reservas⁴. En la comunicación conjunta 9 (JS9) se recomendó a China firmar y ratificar los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁵.

2. Physicians for Human Rights (PHR) recomendó a China ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, retirar las reservas a la Convención y permitir al Comité investigar las denuncias de tortura⁶. El Grupo de Trabajo de Acción Urgente en China (CUAWG) recomendó a China ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad⁷. Chinese Human Rights Defenders (CHRD) recomendó a China firmar y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas⁸ y Christian Solidarity Worldwide (CSW) le recomendó ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional⁹.

2. Marco constitucional y legislativo

3. La Sociedad China de Estudios sobre Derechos Humanos (CSHRS) mencionó las medidas legislativas adoptadas desde 2009, que mejoraban una serie de derechos concretos, sobre todo relativos a las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, así como la introducción de un sistema de litigación de interés público limitado¹⁰. La Sociedad jurídica de China (CLS) facilitó información detallada sobre las recientes enmiendas a la Ley de procedimiento penal y señaló que entre los objetivos de esa Ley figuraban "el respeto y la protección de los derechos humanos"¹¹. Amnistía Internacional (AI) también informó de que la nueva Ley de procedimiento penal incorporaba al derecho interno la exclusión de las pruebas ilícitas en las causas penales, disminuyendo así la utilización de pruebas obtenidas mediante tortura; avanzaba hacia el reconocimiento de la presunción de inocencia; y mejoraba algunas de las garantías de procedimiento para los sospechosos y los acusados en causas por delitos castigados con la pena capital¹².

4. AI informó de que el artículo 73 de la nueva Ley de procedimiento penal hacía legales, *de facto*, las desapariciones forzadas al eliminar el requisito de que la policía tuviera que informar a la familia del lugar concreto en que estaba detenido o recluso su familiar y permitir a la policía mantener detenido a un individuo, durante un periodo de hasta seis meses, sin tener que desvelar su paradero y sin que dicho paradero tuviera que ser un centro de detención oficial¹³.

3. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas de política

5. La CSHRS recomendó a China contemplar activamente la posibilidad de establecer una institución nacional de derechos humanos¹⁴. La HKAA recomendó a China establecer una institución nacional conforme a los Principios de París¹⁵.

6. Human Rights Watch (HRW) felicitó al Gobierno por apoyar la universalidad de los derechos humanos en su primer Plan Nacional de Acción para los derechos humanos (2009-2010), pero dijo que en el segundo Plan (2012-2015) el compromiso del Gobierno aparecía debilitado, al prometerse garantizar el respeto de los derechos humanos conforme al "principio de viabilidad", una expresión vaga que permitía al Gobierno eludir las obligaciones consideradas "inviabiles"¹⁶. CASS-HRRC recomendó incorporar, de manera efectiva, el contenido del Plan Nacional de Acción a la capacitación y evaluación de la función pública¹⁷. CSW recomendó a China acordar puntos de referencia para medir el progreso, y medidas para llevar a cabo los planes¹⁸.

7. CASS-HRRC recomendó a China seguir ampliando la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el proceso de desarrollo, ejecución, examen y evaluación de los Planes Nacionales de Acción, y escuchando sus opiniones al respecto. También le recomendó seguir creando, de forma proactiva, las condiciones necesarias para que las ONG pudieran participar en la ejecución de los planes y la supervisión pública, así como potenciar al máximo su papel a ese respecto¹⁹.

8. Rights Campaign (RC) facilitó información sobre los autores de quejas y grupos de derechos humanos que pedían participar en el desarrollo de los Planes Nacionales de Acción para los derechos humanos y el informe nacional sobre la situación de los derechos humanos, así como sobre la formulación de una solicitud de divulgación de información²⁰. Algunos de los que habían pedido participar en la preparación de esos documentos habían sido encarcelados o sometidos a un proceso de reeducación por el trabajo²¹. En una respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la información incluida en el informe nacional sobre la situación de los derechos humanos de secreto de Estado que no debía desvelarse²².

9. La Fundación para la Paz y el Desarrollo de Viet Nam (VPDF) informó de que, en la actualidad, la formación sobre derechos humanos se incluía como asignatura obligatoria en los programas de estudios de las escuelas²³. La Fundación China para el Desarrollo de los Derechos Humanos (CFHRD) esperaba que más universidades y facultades de derecho ofrecieran periódicamente cursos sobre normas de derechos humanos²⁴, y que el Gobierno apoyara la publicación de más obras sobre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, con fotos y material de audio²⁵. La CFHRD pidió que se impartiera capacitación constante sobre derechos humanos a los funcionarios locales, y que se mejorara la formación sobre derechos humanos impartida a los comisarios de policía, los funcionarios de prisiones y los directores de oficinas judiciales²⁶.

10. El Centro de Investigación y Asistencia Jurídica a la Infancia de Beijing (BCLARC) recomendó al Gobierno que miembros de la sociedad civil especializados en la infancia evaluaran el sistema de protección del niño y propusieran una reforma oficial de dicho sistema²⁷.

11. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (MOVPAZ) destacó la importancia geopolítica de China y su promoción de una política de paz y resolución de conflictos mediante la negociación y la diplomacia²⁸.

B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

1. Cooperación con los órganos de tratados

12. La CSHRS recomendó a China seguir trabajando en el seguimiento de las recomendaciones razonables formuladas por los órganos de tratados, entre otras cosas en el contexto de la ejecución de un Plan Nacional de Acción para los derechos humanos²⁹.

2. Cooperación con los procedimientos especiales

13. La CSHRS sugirió a China que, según procediera, invitara a más procedimientos especiales relativos a los derechos económicos, sociales y culturales a visitar el país³⁰. CSW recomendó a China cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales³¹. HRW recomendó a China acceder a las múltiples solicitudes de Relatores Especiales de visitar China, incluida la zona del Tíbet³². Article 19 recomendó cursar invitaciones a los Relatores Especiales sobre los derechos culturales, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y la situación de los defensores de los derechos humanos³³. La Asociación de Amistad Suiza-Tíbet (STFA) recomendó acordar una fecha concreta para la visita del Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias³⁴. En la JS9 se recomendó a China acceder a la solicitud de visita formulada por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados³⁵, y Life Funds for North Korean Refugees (LFNKR) recomendó cursar una invitación a los Relatores Especiales sobre los derechos humanos de los migrantes y sobre la trata de personas³⁶.

14. Según Human Rights in China (HRIC), desde 2009 China ha seguido participando plenamente en el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, pero aún no ha aplicado sus recomendaciones y dictámenes finales sobre los individuos detenidos de manera arbitraria, como Liu Xiaobo³⁷. Freedom Now (FN) expresó preocupaciones similares y recomendó a China cooperar con todos los procedimientos especiales, incluidos el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, responderles y aplicar sus recomendaciones³⁸.

3. Cooperación con el ACNUDH

15. La Red Internacional del Tíbet (ITN) recomendó a China acordar, con carácter urgente, fechas para que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pudiera visitar el país en el futuro próximo, y que dicha visita incluyera las prefecturas autónomas del Tíbet, sobre todo Sichuan y Qinghai, donde las inmolaciones habían sido más frecuentes, así como la Región Autónoma del Tíbet³⁹.

C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

16. La Unión de Mujeres Lao (LWU) recomendó a China intensificar la aplicación de la Ley de protección de los derechos e intereses de la mujer, promoviendo así la igualdad entre los géneros⁴⁰. La Sociedad de Investigación de Mujeres Chinas (CWRS) recomendó prestar más atención a la discriminación entre los géneros en el empleo y al establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra este tipo de discriminación⁴¹.

17. Según Hong Kong Unison (HK-Unison), la Ordenanza sobre la discriminación racial excluía la discriminación por motivos de nacionalidad e idioma, lo que suponía su legalización *de facto*⁴². HK-Unison instó al Gobierno de la RAEHK a aplicar un programa de estudios en que se enseñara el chino como segunda lengua, y a examinar la competencia lingüística del chino como verdadera exigencia profesional para todos los puestos de la función pública⁴³.

18. En la comunicación conjunta 2 (JS2) se afirmó que los trabajadores migratorios eran tratados como ciudadanos de segunda categoría y sometidos a distintas formas de explotación y discriminación⁴⁴. Para hacer frente a los problemas de los trabajadores que migraban del medio rural al medio urbano, y de sus familiares, el Consejo General de la Abogacía China (ACLA) recomendó al Gobierno seguir modificando las políticas jurídicas

sobre el registro de hogares en el medio urbano, la educación de los niños, las condiciones de vida y la seguridad social; reforzar la capacitación en materia de asesoramiento y orientación; aumentar los conocimientos que los trabajadores migratorios tienen del sistema jurídico y sus derechos; e impulsar a los organismos que prestan servicios de asesoría jurídica a reforzar los servicios de asistencia letrada a este tipo de trabajadores⁴⁵. La Federación Panchina de Sindicatos (ACFTU) también recomendó al Gobierno que adoptara medidas más firmes para salvaguardar los derechos de los trabajadores migratorios y los trabajadores temporales por contrata⁴⁶.

19. La Sexual Rights Initiative (SRI) reconoció las medidas adoptadas por China para despenalizar y desestigmatizar a las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans⁴⁷, y recomendó crear leyes y reglamentos de lucha contra la discriminación y aprobar leyes para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo y parejas de hecho⁴⁸. En la comunicación conjunta 3 (JS3) se recomendó a la RAEHK ampliar al sector privado su prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual⁴⁹.

20. La comunicación conjunta 4 (JS4)⁵⁰ y el Instituto Aizhixing de Beijing (BAI)⁵¹ señalaron que la creación de comités de gobernanza social global y de tareas para grupos especiales en todo el país, para vigilar de cerca a las personas que vivían con el VIH/SIDA y a aquellas vulnerables al VIH/SIDA, a las personas encarceladas, a los usuarios de drogas y a las personas con enfermedades mentales, era discriminatoria y constituía una intromisión en la intimidad de esos individuos. La SRI recomendó a China reconsiderar el registro del nombre real al solicitar las pruebas del VIH y garantizar la protección del derecho a la intimidad de todo el que solicitara este tipo de pruebas⁵². En la JS4 también se sugirió que los tribunales aplicaran la Ley de procedimiento civil para proteger a las personas infectadas por el VIH/SIDA como consecuencia de la venta de sangre, de transfusiones de sangre o de utilización de hemoderivados, y que dichas víctimas tuvieran derecho a solicitar justicia⁵³. La Federación de Mujeres de China (ACWF) recomendó mejorar la prevención de la transmisión del VIH/SIDA de la madre al hijo y la protección de los niños afectados por el SIDA⁵⁴.

21. En la comunicación conjunta 5 (JS5) se hizo referencia a la información de que en China había 17,94 millones de usuarios de drogas y que estos se enfrentaban a posibles actos de discriminación por parte de la sociedad y los organismos gubernamentales⁵⁵. En la comunicación conjunta 7 (JS7) se informó de que en China eran comunes las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la fiscalización de las drogas⁵⁶. AI dijo que, según los cálculos de las Naciones Unidas, los centros de rehabilitación forzada de toxicómanos del país podían haber acogido a hasta medio millón de individuos en 2009⁵⁷.

2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

22. HRIC señaló que, desde el último EPU de China, se habían llevado a cabo en el país una serie de reformas respecto de la pena de muerte⁵⁸. La Dui Hua Foundation (DHF) informó de que, según los cálculos, de 2009 a 2012 se había ejecutado a 16.500 personas, lo cual suponía un descenso del 39% en el número de ejecuciones con respecto al período 2005-2008⁵⁹. También informó de que el Viceministro de Salud había afirmado que China iría reduciendo gradualmente, desde ese momento hasta 2015, su dependencia de las ejecuciones de presos para la donación de órganos⁶⁰. La DHF recomendó a China seguir trabajando para abolir la pena de muerte, entre otras cosas publicando los datos existentes sobre las condenas y penas de este tipo y reduciendo la cantidad de delitos castigados con la pena capital, sobre todo en el caso de delitos no violentos y delitos económicos⁶¹.

23. Según HRW, el recurso a la tortura seguía siendo endémico en el sistema de justicia penal y otras ramas del Estado chino⁶². CHRD denunció que conductas que, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, serían constitutivas de tortura, como infligir graves sufrimientos mentales, no se

consideraban como tales en la Ley de procedimiento penal revisada, y que las declaraciones obtenidas mediante esas conductas seguían admitiéndose en juicio⁶³.

24. Según HRIC, los expertos jurídicos habían observado un resurgimiento de instituciones políticas extralegales y oficiosas que aplicaban medidas gubernamentales abusivas y represivas, como las cárceles clandestinas o las desapariciones forzadas para activistas, autores de quejas y disidentes⁶⁴. CHRD señaló que algunos autores de quejas habían denunciado a las autoridades locales por recluirlas de forma ilegal en cárceles clandestinas, pero que los tribunales rara vez habían admitido sus denuncias a trámite⁶⁵. HRIC recomendó a China enmendar su Ley de procedimiento penal para garantizar a la población sólidas garantías de procedimiento al enfrentarse a una privación de libertad, incluido el arresto domiciliario⁶⁶.

25. HRIC observó que el actual sistema de reeducación por el trabajo confería amplias facultades discrecionales a las autoridades locales y que estas, en consecuencia, a menudo situaban en su punto de mira a los autores de quejas legítimas⁶⁷. HRW dijo que, a principios de 2013, el Gobierno había dicho que estaba considerando la posibilidad de dismantelar el sistema de detención administrativa de la reeducación por el trabajo⁶⁸. CHRD dijo que la principal reforma parecía ser puramente estética: cambiar la expresión "reeducación por el trabajo" por "corrección de conductas ilegales"⁶⁹.

26. En la JS9 se clasificó la nueva Ley de salud mental como primera ley china en la materia, pero se señaló que esta Ley excluía, de manera selectiva, el sistema *Ankang*, la red de hospitales policiales de carácter psiquiátrico administrada por el Ministerio de Seguridad Pública⁷⁰. CHRD dijo que la Ley de salud mental dejaba abierta la puerta a posibles abusos de familiares, policías o miembros del Gobierno⁷¹.

27. La DHF señaló que la violencia doméstica era una importante causa de delitos cometidos por mujeres. De conformidad con las Reglas de Bangkok, en 2009 el Tribunal Superior Popular de Hunan emitió los primeros principios rectores sobre el problema de la violencia doméstica, a nivel provincial, y alentó a imponer sentencias menos severas y aprobar reducciones de condena para aquellas mujeres que "combaten la violencia con violencia". Sin embargo, a nivel nacional la mayoría de las mujeres siguen siendo duramente castigadas⁷². HRW recomendó a China aprobar una ley general de lucha contra la violencia doméstica⁷³.

28. PHR dijo que el desequilibrio entre los sexos observado en todo el país como consecuencia de la preferencia cultural por los hijos varones era causa de infanticidios, trata de seres humanos y esclavitud sexual⁷⁴.

29. La Iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas (GIEACPC) recomendó que se aprobasen con carácter prioritario, en todo el Estado, disposiciones legislativas que prohibiesen expresamente el castigo corporal del niño en el hogar y en todas las formas de acogimiento⁷⁵.

3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho

30. La Asociación del Pueblo Chino para la Paz y el Desarme (CPAPD) recomendó al Gobierno seguir: reforzando y mejorando el sistema de seguridad judicial y legislativa; mejorando la gobernanza conforme a la ley y al estado de derecho; e impidiendo y eliminando todas las formas brutales e inhumanas de aplicación de la ley⁷⁶.

31. Según la DHF, de 2008 a 2010 se celebraron en Xinjiang (que representa menos del 2% de la población de China) el 50% de los juicios por delitos constitutivos de "peligro para la seguridad del Estado" de todo el país. Al parecer, 847 de las 849 personas acusadas de separatismo o de incitar al separatismo que aparecían en la base de datos de presos políticos de la DHF eran uigures o tibetanos⁷⁷. La DHF recomendó aclarar los criterios para

imponer sentencias y determinar las causas por las que un acto constituye un peligro para la seguridad del Estado; hacer públicas las condenas impuestas por este tipo de actos; y velar por que la etnia no se utilice como base para limitar las libertades fundamentales y discriminar en el ámbito de la aplicación de la ley, imponiendo, por ejemplo, penas más severas⁷⁸.

32. En la JS9 se informó de que, como consecuencia de la falta de tribunales independientes, los veredictos estaban preestablecidos⁷⁹. En la JS6 se señaló que prácticamente no se absolvía a ningún acusado. Al parecer la tasa de condenas superaba el 99% y, aun en los casos en que no había confesiones, los abogados eran susceptibles de una condena penal, en virtud del artículo 306 del Código Penal chino, por el mero hecho de declarar "no culpables" a sus clientes⁸⁰.

33. La comunicación conjunta 6 (JS6)⁸¹ y China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG)⁸² informaron de que, supuestamente, los abogados de China eran objeto de una fuerte represión, sobre todo los que se encargaban de casos delicados, como representar a seguidores de Falun Gong, a activistas tibetanos, a activistas en favor de los derechos relativos a la tierra o a víctimas del VIH. El CUAWG informó de que, en 2012, el Ministerio de Justicia había pedido a todos los abogados titulados que juraran lealtad al Partido Comunista y que esa lealtad estuviera por encima de la lealtad que debían a sus clientes⁸³. Según la JS9, los "abogados descalzos" (en su mayoría abogados defensores sin titular) habían venido a suplir una laguna de acceso a asistencia jurídica existente como consecuencia de la persecución de que eran objeto los abogados titulados⁸⁴. CHRLCG recomendó a China ejecutar su plan, previsto en el Libro Blanco sobre la Reforma Judicial en China, de revisar las leyes sobre este respecto a fin de ofrecer una garantía jurídica que permita a los abogados superar las dificultades experimentadas para reunirse con los sospechosos o acusados, acceder a los materiales relativos a los distintos casos y obtener pruebas mediante investigaciones. También le recomendó regular las prácticas ilícitas de funcionarios de las ciudades y provincias que vulneraban el derecho del ciudadano a una defensa⁸⁵. La CLS pidió que los departamentos pertinentes propusieran disposiciones operacionales y específicas para velar por que los sospechosos de delitos castigados con la pena de muerte o cadena perpetua recibieran asistencia oportuna de abogados de oficio⁸⁶.

34. El ACLA⁸⁷ informó de que la Ley de procedimiento penal se había revisado en 2012, y la DHF⁸⁸ dijo que en esas revisiones se había introducido un capítulo sobre casos de justicia juvenil y que se esperaba que con las reformas se redujeran las penas privativas de libertad. La DHF propuso recomendaciones relativas a la reforma del sistema de justicia juvenil en el interés superior de los jóvenes⁸⁹.

35. La HKA instó a China a respetar plenamente las recomendaciones del Comité contra la Tortura sobre el Movimiento pro Democracia de 1989, así como a darles una respuesta positiva, y a cesar el hostigamiento a que estaban sometidas las Madres de Tiananmen⁹⁰.

4. Derecho a la intimidad

36. En la comunicación conjunta 8 (JS8) se afirmó que, en ausencia de una definición del derecho a la intimidad en la legislación, los funcionarios gubernamentales citaban con frecuencia esta intimidad como excusa para frustrar los esfuerzos de lucha contra la corrupción⁹¹. En la JS8 se recomendó a China abandonar la vigilancia intrusiva y la interceptación de comunicaciones digitales, aprobar una ley nacional de protección de datos y promover el examen y el reconocimiento del derecho a la intimidad en los futuros Planes Nacionales de Acción para los derechos humanos⁹².

5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

37. El Centro de Investigación Religiosa de China (CRRC) dijo que, en el contexto de la rápida transformación social que estaba experimentando China, una serie de individuos y organizaciones habían aprovechado para emprender actividades ilegales y delictivas en nombre de la religión, alterando el orden social y socavando la unidad nacional, en un intento de dividir el país, como los seguidores del Falun Gong, los separatistas tibetanos y los separatistas del Turquestán Oriental⁹³.

38. Algunos grupos, como el European Centre for Law and Justice (ECLJ)⁹⁴ y el Grupo pro Derechos Humanos Hua Zhang Dharma de Noruega (HZDHRGN)⁹⁵, denunciaron presuntas persecuciones religiosas. Según AI, las autoridades seguían persiguiendo y enjuiciando a individuos y grupos religiosos considerados "ilegales" o "herejes" por las autoridades, o que trataban de operar sin autorización estatal, como los cristianos de "casas de culto" y determinados católicos, budistas, musulmanes y otros grupos espirituales⁹⁶.

39. La Comisión Justicia y Paz de la diócesis católica de Hong Kong (HKJPC) expresó preocupación por la situación de la Iglesia Católica en la China continental y por que las autoridades chinas hubieran impuesto normas de carácter político y religioso contra los principios y prácticas de la fe católica⁹⁷, como la ordenación de obispos sin mandato pontificio⁹⁸.

40. AI informó de que China seguía llevando a cabo, a nivel nacional, una campaña sistemática y a menudo violenta para acabar con el grupo espiritual Falun Gong, ilegalizado desde 1999 por considerarse "hereje"⁹⁹. CSW informó de la creación de un grupo de tareas específico, la "Oficina 6-10", para combatir este movimiento. En 2012 diversas fuentes denunciaron a CSW que el mandato de esa Oficina se había ampliado para incluir a grupos eclesiales sin registrar y a defensores de los derechos humanos¹⁰⁰. En la comunicación conjunta 10 (JS10) se denunció que, desde 2009, se habían registrado 352 muertes como resultado de torturas y otros tipos de maltrato¹⁰¹. Las autoridades rara vez investigaban las muertes de los miembros de Falun Gong detenidos, y los autores de esas muertes gozaban de impunidad. Además, los familiares y abogados de las víctimas que presionaban para que se investigaran los casos eran objeto de represalias¹⁰². Según la Sociedad por los Pueblos Amenazados (STP), los miembros de Falun Gong internados en centros de reeducación por el trabajo eran obligados también a trabajar en los campamentos o como trabajadores temporeros produciendo artículos para mercados de exportación occidentales¹⁰³.

41. La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) dijo que, de 2009 a 2012, China había seguido controlando los medios de comunicación nacionales e impidiendo a los medios extranjeros cubrir cuestiones que China consideraba "delicadas" desde un punto de vista político¹⁰⁴. El Independent Chinese Pen Centre (ICPC) dijo que había sido testigo de una campaña para encarcelar o silenciar a voces disidentes destacadas¹⁰⁵. Article 19 denunció concretamente una ofensiva contra la disensión artística¹⁰⁶. Pen International (PEN-I) recomendó a China respetar y proteger el derecho de los escritores y editores de China a publicar sin miedo a represalias o a injerencia estatal, y fomentar la creación de una literatura valorada a nivel nacional e internacional y el crecimiento de un sector editorial de talla mundial¹⁰⁷. La Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA) pidió al Consejo que instara al Gobierno chino a poner fin de inmediato a las excesivas restricciones impuestas a los periodistas nacionales e internacionales¹⁰⁸. Reporteros sin fronteras (RSF/RWB) recomendó que las autoridades castigaran a los funcionarios provinciales y locales que abusaran de su poder para imponer restricciones a la prensa¹⁰⁹.

42. La Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) informó de un aumento de las detenciones preventivas y masivas de defensores de los derechos humanos en 2011 y 2012¹¹⁰. En la JS9 se afirmó que los defensores de los derechos humanos que el Estado tenía en su punto de mira trabajaban en distintas esferas, como las demoliciones o

los desalojos forzosos, las reformas políticas, la libertad de expresión o religión o los derechos de los trabajadores o las minorías étnicas. Otros grupos que presuntamente también estaban en el punto de mira eran los abogados (titulados y "descalzos"), los candidatos independientes a las elecciones y los autores de quejas que actuaban en nombre de sus comunidades¹¹¹. CIVICUS afirmó que, en 2012, el Gobierno había emitido una media de 12 directivas diarias para prohibir informar sobre determinadas cuestiones¹¹².

43. HRIC dijo que, durante los últimos cuatro años, China había seguido imponiendo restricciones considerables al funcionamiento legal de las organizaciones de la sociedad civil¹¹³. En la JS2 se señaló que la libertad de asociación se veía socavada cuando se obligaba a las organizaciones de la sociedad civil independientes a someterse a la supervisión de un órgano público o del Partido Comunista¹¹⁴. La Red de ONG de China para los Intercambios Internacionales (CNIE) dijo que, en 2011, existían en China 462.000 organizaciones de la sociedad civil activas, entre otras cosas, en las esferas del alivio de la pobreza, la salud, la educación, el medio ambiente y los derechos humanos¹¹⁵. La CPAPD esperaba que el Gobierno siguiera acogiendo con agrado, y alentando, a los miembros de la sociedad civil de China activos en las esferas de los derechos humanos, y que promoviera y guiara su participación en proyectos internacionales de cooperación e intercambio, para contribuir al desarrollo de los derechos humanos en China y en el resto del mundo¹¹⁶. La SRI recomendó reforzar el diálogo entre el Gobierno y las ONG centradas en los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans; la protección del medio ambiente; las personas con discapacidad; y los derechos de la mujer¹¹⁷.

44. PEN-I denunció que, presuntamente, existía una "policía de Internet", con entre 20.000 y 50.000 empleados, que trabajaba para mantener la estabilidad señalando o retirando contenido en la Red y supervisando quién publicaba material ofensivo para el Gobierno. A pesar de la vigilancia generalizada¹¹⁸, RSF/RWB dijo que los blogueros y los usuarios de Internet ayudaban a configurar la opinión pública¹¹⁹. La Sociedad de Internet de China (ISC) dijo que había cientos de millones de blogueros y usuarios de redes sociales. Problemas sociales como la trata de niños se examinaban y resolvían a través de Internet¹²⁰. La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) habló del paso alentador que suponía el derecho a criticar y opinar sobre los funcionarios y los órganos del Estado que incumplían sus obligaciones y responsabilidades¹²¹. La Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) hizo referencia a la participación ciudadana directa en los asuntos públicos¹²².

45. La CSHRS hizo referencia a las dificultades que complicaban, limitaban y afectaban la difusión de información pública, como el límite de autodesarrollo de algunos funcionarios, que impedía respetar el principio de una difusión oportuna, abierta y transparente de la información pública¹²³. La CSHRS recomendó controlar estrechamente la aplicación de la Ordenanza sobre divulgación de información¹²⁴. La CFHRD recomendó crear un sistema de gobierno electrónico orientado al usuario¹²⁵. Article 19 recomendó al Ministerio de Protección del Medio Ambiente establecer un mecanismo modelo para la divulgación de información sobre el medio ambiente¹²⁶.

6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

46. La ACFTU señaló que, al incumplir algunas empresas sus obligaciones, como firmar contratos laborales y pagar seguros de accidentes laborales, los trabajadores migratorios no podían disfrutar de los derechos que les confería la Ley de prevención de enfermedades ocupacionales y eran el mayor grupo afectado por la neumoconiosis¹²⁷. En la JS2 se afirmó que las empresas con conexiones políticas tendían a presentar mayores tasas de muertes, porque en ellas tendía a prevalecer la corrupción endémica, algo que reducía la eficacia de las medidas de prevención¹²⁸. La ACFTU señaló que el Gobierno debía reforzar la responsabilidad reguladora en términos de prevención y tratamiento de las

enfermedades ocupacionales y eliminar las tecnologías y los métodos de producción que generaran riesgos ocupacionales graves¹²⁹.

47. El Centro Zhicheng de Investigación y Asistencia Jurídica a Trabajadores Migrantes de Beijing (BZMW) informó de que muchos empleadores habían abusado del sistema de mano de obra temporal (trabajadores temporales por contrata). El Congreso Nacional del Pueblo publicó una enmienda a la Ley de contratos laborales en que se proponía eliminar la utilización de este sistema¹³⁰. CASS-HRRC recomendó al Gobierno que pidiera a las pequeñas y medianas empresas (pymes) cumplir la Ley de contratos laborales¹³¹. La ACFTU recomendó también ir situando poco a poco el salario mínimo en el 40% a 60% del salario promedio de la comunidad local¹³².

48. La Confederación de Sindicatos de Hong Kong (HKCTU) informó de que seguía sin avanzarse hacia unas elecciones verdaderamente democráticas en la ACFTU y que esta seguía gozando de un monopolio estatal. Seguían imponiéndose serias limitaciones a la labor de los grupos de derechos humanos y de organización de los trabajadores¹³³. La HKCTU informó de que el Gobierno de la RAEHK se negaba sistemáticamente a aplicar la recomendación de la OIT de introducir leyes que reconocieran de manera objetiva a los sindicatos a los efectos de las negociaciones colectivas¹³⁴.

7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

49. La Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL) señaló un aumento en la calidad de vida de la población, valoración respaldada por estadísticas objetivas e internacionalmente reconocidas¹³⁵. La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) señaló que los porcentajes de pobreza se habían reducido en casi un 50%, de un 4,2% en 2008 a un 2,8% en 2010¹³⁶.

50. Según la CPAPD, seguían existiendo grandes diferencias en los ingresos, y los recursos sociales se distribuían de forma injusta¹³⁷. La CPAPD formuló recomendaciones, como reformar el sistema de distribución de los ingresos, intensificar la lucha contra la corrupción y resolver las preocupaciones relativas a una educación de calidad, al empleo, a la seguridad social, a la atención de la salud, a la vivienda, al medio ambiente, a los alimentos y a la seguridad de los medicamentos¹³⁸.

51. La Sociedad china del cuidado y la compasión (CCCS) habló del efecto que el envejecimiento de la población china tenía en el desarrollo y las formas de subsistencia de sus habitantes¹³⁹ y recomendó a China mejorar los servicios sociales y crear un sistema nacional de apoyo para los ancianos de familias con un solo hijo¹⁴⁰.

52. AI dijo que en los últimos cuatro años se había obligado a millones de personas de toda China a abandonar sus hogares sin ningún tipo de protección jurídica¹⁴¹. La sección japonesa de la Federación para una China Democrática (FDC)¹⁴² y la Unión de asociaciones de autores de quejas sobre demoliciones y desalojos forzosos en China (UAPCFEHD)¹⁴³ informaron de que la Constitución garantizaba el derecho a formular quejas. La UAPCFEHD dijo que prácticamente tres cuartas partes de las quejas presentadas tenían que ver con disputas por tierras, incluidos desalojos forzosos. Menos del 0,2% de los autores de quejas tenían éxito en sus reivindicaciones¹⁴⁴. AI recomendó a China crear fuentes alternativas de financiación para que las autoridades locales no tuvieran que depender tanto de las construcciones y ventas de tierras con fines urbanísticos, que conducían a desalojos forzosos masivos¹⁴⁵.

8. Derecho a la salud

53. La ACWF recomendó seguir incorporando una perspectiva de género a la toma de decisiones y los proyectos en materia de salud, así como seguir mejorando los servicios de salud maternoinfantil y el seguro médico básico para que las mujeres pobres del medio urbano, las mujeres del medio rural y las migrantes pudieran acceder a los servicios de salud¹⁴⁶.

54. La Asociación de Mujeres Tibeñas (TWA) habló del problema que suponía prestar asistencia sanitaria a poblaciones aisladas como la población rural nómada de Surmang¹⁴⁷. Habló de los presuntos abusos cometidos específicamente contra las mujeres del Tíbet, como la imposición de medidas de control de la natalidad en forma de abortos y esterilizaciones¹⁴⁸. PHR recomendó a China acabar con las esterilizaciones y los abortos forzosos como medidas correctivas adoptadas en el contexto de las normas aprobadas por la Comisión de Planificación de la Familia¹⁴⁹.

9. Derecho a la educación

55. El BCLARC¹⁵⁰ y el ACLA¹⁵¹ formularon recomendaciones como que el Gobierno invirtiera más recursos, y adoptara medidas más estrictas, para garantizar que los niños en edad escolar terminaran los nueve años de enseñanza obligatoria, lo que contribuiría de manera fundamental a combatir el problema del trabajo infantil. La Asociación de Educación para el Intercambio Internacional de China (CEAIE) sugirió mejorar la calidad de la educación recibida por los grupos desfavorecidos, entre otras cosas mejorando las condiciones en las escuelas mediante un análisis de las condiciones locales, ofreciendo recursos educativos de calidad y empleando la tecnología de la información y las comunicaciones¹⁵².

56. En la JS2 se señaló que había más de 30 millones de estudiantes matriculados en escuelas de formación profesional y que muchas de ellas tenían ya pactadas colocaciones laborales que a menudo conducían a casos de explotación laboral. En la JS2 se recomendó a China combatir la corrupción en las escuelas¹⁵³.

57. PEN-I expresó preocupación por el deterioro de los derechos lingüísticos de las minorías étnicas, puesto que el mandarín era la principal lengua de enseñanza, y por las denuncias de que los maestros que se habían quejado del nuevo sistema habían perdido su puesto de trabajo como consecuencia de ello¹⁵⁴.

10. Derechos culturales

58. El Movimiento en Redes del Patrimonio y Diversidad Cultural de Venezuela (RPDCV) encomió los avances realizados por China en materia de conservación del patrimonio mundial y protección del patrimonio cultural intangible¹⁵⁵. La Asociación China de las Minorías Étnicas para los Intercambios Internacionales (CEMAFEE) habló de las políticas de desarrollo y protección de las culturas minoritarias y recomendó a China invertir más en una "enseñanza bilingüe"¹⁵⁶.

11. Personas con discapacidad

59. El Movimiento RPDCV destacó la importancia de mejorar los servicios para las personas con discapacidad, cuyo número se calculaba en 85 millones¹⁵⁷. La ISC señaló que solo un 0,1% de las personas con discapacidad visual utilizaba Internet y recomendó al Gobierno aumentar la accesibilidad de la información¹⁵⁸.

12. Minorías y pueblos indígenas

60. En la comunicación conjunta 11 (JS11) se señaló que el Gobierno estaba tratando de socavar la práctica budista tibetana y reemplazar la lealtad al Dalai Lama, en el corazón y la mente de los tibetanos, por la lealtad al partido-Estado, minando así la identidad nacional

del pueblo tibetano y sus raíces¹⁵⁹. HRIC dijo que, desde 2009, más de 100 tibetanos se habían inmolado para protestar contra las políticas y los ataques de las autoridades chinas. El Gobierno había respondido aumentando la militarización, vilipendiando al Dalai Lama, imponiendo una "educación patriótica" obligatoria y aumentando la vigilancia sobre las actividades religiosas, las detenciones¹⁶⁰, las limitaciones de acceso a la región¹⁶¹ y las penas impuestas a los acusados de "ayudar" a quienes se inmolan¹⁶². La TWA, la ITN, la STFA y HRW¹⁶³ plantearon preocupaciones similares, y Tibet Watch (TW) señaló que la naturaleza de las detenciones y del sistema judicial era reflejo de la ausencia de un estado de derecho y de la existencia de una cultura de impunidad¹⁶⁴. La Asociación china para la preservación y el desarrollo de la cultura tibetana (CAPDTC) dijo que era el círculo del Dalai Lama el que había incitado a algunas de las inmoluciones en las zonas del Tíbet¹⁶⁵. La CAPDTC recomendó promover la participación política de las mujeres del Tíbet en las zonas rurales y de pastoreo¹⁶⁶.

61. La ITN denunció presuntas confiscaciones de tierras para la implantación de actividades industriales, en particular para la extracción de recursos y la creación de presas, sin un consentimiento previo, libre e informado¹⁶⁷, así como la constante imposición de políticas de reasentamiento que privaban a los pastores nómadas tibetanos y otros habitantes de las zonas rurales de sus medios de subsistencia¹⁶⁸.

62. La Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO) informó de que la llegada de chinos de la etnia han a la Mongolia interior había llevado al establecimiento de nuevas políticas de uso de la tierra, acelerando el proceso de desertificación, que China pretendía revertir manteniendo a los pastores de la Mongolia interior alejados de sus tierras ancestrales¹⁶⁹.

63. AI informó de que China seguía tratando mal a los uigures que practicaban su religión con independencia del Gobierno, por ejemplo mediante escuelas religiosas privadas¹⁷⁰. En la comunicación conjunta 1 (JS1) se informó de los problemas en materia de derechos humanos políticos, civiles, económicos, culturales y sociales planteados por las acciones y las políticas adoptadas por el Estado tras los disturbios que tuvieron lugar en Urumqui en julio de 2009¹⁷¹. La UNPO señaló que la disparidad económica había sido la causa de la tensión étnica observada en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang¹⁷².

13. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

64. LFNKR informó de que la política china de repatriación forzosa de los refugiados procedentes de un país vecino situaba a dichos refugiados en una situación extremadamente vulnerable, sobre todo en lo que respectaba a la trata de seres humanos¹⁷³. Human Rights Without Frontiers International (HRWF) recomendó a China facilitar al ACNUR acceso sin trabas a las cárceles fronterizas con refugiados de las zonas de Tumen y Tandung, prestando especial atención a los niños y a las embarazadas, y reconsiderar su política de denegar la condición de refugiado a los desertores de países vecinos¹⁷⁴.

65. Según HRW, China obligó a aproximadamente 4.000 miembros de la etnia kachin a abandonar la provincia de Yunnan y regresar a una zona de conflicto en un país vecino¹⁷⁵.

14. Derecho al desarrollo y cuestiones relativas al medio ambiente

66. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) reconoció los avances realizados a pesar de la crisis económica, y señaló que la estrategia destinada a estimular el mercado nacional y otras reformas institucionales permitirían a China aumentar su desarrollo¹⁷⁶. El Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) destacó el proceso de planificación para coordinar el desarrollo rural y urbano y acabar con la pobreza rural¹⁷⁷. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) mencionó mejoras concretas en materia de educación y salud de las mujeres y los niños¹⁷⁸.

67. La Sociedad China para la Promoción del Programa Guangcai (CSPGP)¹⁷⁹ y la Fundación China para el Programa Guangcai (CFGS)¹⁸⁰ facilitaron información sobre la contribución de las empresas privadas chinas a la reducción de la pobreza y a programas socialmente responsables. La CSPGP sugirió que las autoridades competentes ofrecieran ayuda y subvenciones a las empresas del sector privado que realizaran nuevas construcciones en el medio rural adaptándose al plan del sector agrícola y/o emplearan alta tecnología¹⁸¹.

68. En la comunicación conjunta 12 (JS12) se destacaron presuntos abusos cometidos por empresas chinas en el África Subsahariana, como actos de violencia contra trabajadores, salarios y prácticas laborales deficientes, condiciones de trabajo peligrosas, utilización de mano de obra infantil, contaminación de las aguas y desplazamientos forzados de comunidades, y se recomendó alentar a las empresas chinas, públicas y privadas, a respetar las normas reconocidas internacionalmente para la protección de los derechos humanos, laborales y ambientales¹⁸².

15. Situación existente en determinadas regiones o territorios o relacionada con ellos

69. Según la Comisión de Derechos Humanos de Hong Kong, el derecho a la participación política seguía viéndose gravemente vulnerado como consecuencia de un sistema electoral no transparente y un sistema político "dominado por el Ejecutivo". El Gobierno Central del Pueblo ejercía una presión política enorme con respecto al desarrollo democrático de Hong Kong¹⁸³. Hong Kong Human Rights Monitor (HKHRM) instó al Gobierno a aplicar el sufragio universal conforme a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, y a abolir todas las circunscripciones funcionales en las elecciones al Consejo Legislativo¹⁸⁴. La HKJA instó al Consejo a pedir a los funcionarios del Gobierno chino que se abstuvieran de presionar a los medios¹⁸⁵. La Comisión de Derechos Humanos de Hong Kong planteó otras preocupaciones, como el aumento de la pobreza y de las desigualdades en los ingresos, y recomendó crear un órgano independiente que controlara el respeto de los derechos del niño, así como un mecanismo independiente de denuncias contra la policía que tuviera competencias para investigar y formular recomendaciones jurídicamente vinculantes¹⁸⁶.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org.

Civil society

Individual submissions

ACFTU	All-China Federation of Trade Unions, Beijing, People's Republic of China, submission 1 on workers' health and safety, submission 2 on safeguarding rights of vulnerable groups, including internal migrants;
ACLA All	China Lawyers Association, Beijing, China, submission 1 on the rights of internal migrants, submission 2 on the protection of the rights of minors;
ACNU	Asociación Cubana de las Naciones Unidas, Havana, Cuba;
ACWF	All China Women's Federation, Beijing, China;
AI	Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
ANEC	Asociación Nacional de Economistas de Cuba, Havana, Cuba;
ARTICLE 19	Article 19. London, United Kingdom;
BAI	Beijing Aizhixing Institute, Beijing, China;
BCLARC	Beijing Children's Legal Aid and Research Centre, Beijing, China;
BZMW	Beijing Zhicheng Migrant Workers' Legal Aid and Research Center, Beijing, China;

CAPDTC	China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture, Beijing, China, submission 1 on the shadow report on human rights situation in Tibet, submission 2 on the situation of the political and legal rights of Tibetan women;
CASS-HRRC	China Academy of Social Sciences-Human Rights Research Centre, Beijing, China, submission 1 on labour protection, submission 2 on National Plans of Action;
CBDHDD	Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo/ Bolivian Chapter of Human Rights Democracy and Development, La Paz, Bolivia;
CCCS	China Care and Compassion Society, Beijing, China;
CEAIE	China Education Association for International Exchange, Beijing, China;
CEMAFEE	China Ethnic Minorities' Association for External Exchanges, Beijing, China;
CFGS	China Foundation for Guangcai Programme, Beijing, China;
CFHRD	China Foundation for Human Rights Development, Beijing, China, submission 1 on human rights education, submission 2 on Government information disclosure;
CHRD	Chinese Human Rights Defenders, Washington D.C., United States of America;
CHRLCG	China Human Rights Lawyers Concern Group, Hong Kong, China;
CIVICUS	CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Johannesburg, South Africa;
CLS	China Law Society, Beijing, China;
CNIE	China Network of International Exchanges, Beijing, China;
CPAPD	Chinese People's Association for Peace and Disarmament, Beijing, China;
CRRC	China Religious Research Centre, Beijing, China;
CSHRS	China Society for Human Rights Studies, Beijing, China, submission 1 on international human rights treaties, submission 2 on freedom of speech;
CSPGP	China Society for the Promotion of the Guangcai Programme, Beijing, China;
CSW	Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom;
CUAWG	Chinese Urgent Action Working Group, Beijing, China;
CWRS	Chinese Women's Research Society, Beijing, China;
DHF	Dui Hua Foundation, San Francisco, CA, United States of America;
ECLJ	European Centre for Law and Justice, Strasbourg, France;
FDC	Japan Federation for a Democratic China, Tokyo, Japan;
FMC	Federación de Mujeres Cubanas/Federation of Cuban Women, Havana, Cuba;
FN	Freedom Now, Washington DC, United States of America;
GIEACPC	Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, United Kingdom;
HKA	Hong Kong Alliance in support of Patriotic Democratic Movements in China, Hong Kong, China;
HKCTU	Hong Kong Confederation of Trade Unions, Hong Kong, China;
HKHRM	Hong Kong Human Rights Monitor, Hong Kong, China;
HKJA	Hong Kong Journalists Association, Hong Kong, China;
HKJPC	Justice and Peace Commission of the Hong Kong Catholic Diocese, Hong Kong, China;
HK	Unison Hong Kong Unison, Hong Kong, China;
HRIC	Human Rights in China, New York, United States of America;
HRW	Human Rights Watch, Geneva, Switzerland;
HRWF	Human Rights Without Frontiers International, Brussels, Belgium;
HZDHRGN	Hua Zang Dharma Human Rights Group in Norway, Tromsø Norway;
ICPC	Independent Chinese Pen Centre, Hong Kong, China;
IFJ	International Federation of Journalists, Brussels, Belgium;
ISC	Internet Society of China, Beijing, China;
LFNKR	Life Funds for North Korean Refugees, Tokyo, Japan;
LWU	Lao Women's Union, Vientiane, Lao People's Democratic Republic;
MOVPAZ	Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos/Cuban Movement for Peace and Sovereignty of Peoples, Havana, Cuba

OSPAAL	Organizacion de Solidaridad de Los Pueblos de África, Asia y América Latina/Cuba Organization of Solidarity of the Peoples of Africa, Asia and Latin America, Havana, Cuba;
PEN-I	Pen International, London, United Kingdom;
PHR	Physicians for Human Rights, Cambridge, MA, United States of America;
RC	Rights Campaign, Jiangsu province, China;
RPDCV	Movimiento en Redes del Patrimonio y Diversidad Cultural de Venezuela/Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Miranda, Venezuela;
RSF/RWB	Reporters without borders, Paris France;
SRI	Sexual Rights Initiative, on behalf of Action Canada for Population and Development (ACPD), Ottawa, Canada, Akahatá – Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros (South America), Coalition of African Lesbians (CAL), CREA (India), Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) and Federation for Women and Family Planning (Poland);
STP	Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany;
STFA	Swiss Tibetan Friendship Association, Zurich, Switzerland
TW	Tibet Watch, London, United Kingdom;
UAPCFEHD	The United Association of Petitioners of China Forced Evictions & Home Demolitions, New York, United States of America;
UNJC	Unión Nacional de Juristas de Cuba/National Union of Jurists of Cuba, Cuba
UPEC	Unión de Periodistas de Cuba/Union of Journalists of Cuba, Havana, Cuba;
UNPO	Unrepresented Nations and Peoples Organizations, The Hague, The Netherlands;
VPDF	Vietnam Peace and Development Foundation, Ha Noi, Viet Nam
<u>Joint submissions</u>	
HKHRC	Hong Kong Human Rights Commission - joint submission, A coalition of eleven members, including Christians for Hong Kong Society; Hong Kong Catholic Youth Council; Hong Kong Christian Industrial Committee; Hong Kong Christian Institute; Hong Kong Federation of Catholic Students; Hong Kong Social Workers' General Union; Hong Kong Storehouse and Transportation Staff Association; Hong Kong Women Christian Council; Justice and Peace Commission of the Hong Kong Catholic Diocese; Society for Community Organization and Student Christian Movement of Hong Kong, Hong Kong, China;
ITN	International Tibet Network: Joint submission, ITN, San Francisco, CA, United States of America, - a coalition of 185 Member Groups from over 50 countries. Lead Authors are Tibet Justice Centre, Canada Tibet Committee, Students for a Free Tibet, International Tibet Network Secretariat, with the support of Australia Tibet Council;
JS1	Joint Submission 1: Uyghur Human Rights Project/Uyghur American Association, Washington D.C., United States of America;
JS2	Joint Submission 2: The Chinese Working Women Network , Globalization Monitor, Labour Action China, Labour Education and Service Network, Shenzhen and Hong Kong, China;
JS3	Joint Submission 3: Rainbow Action, Women Coalition of HKSAR (WCHK), Hong Kong, China;
JS4	Joint Submission 4: National Committee for people who are infected with HIV/AIDS due to blood infusion, Committee for women who are infected with HIV/AIDS due to blood infusion, Ningling County, Henan Province, Association for HIV/AIDS Prevention, Tuocheng County, Henan Province, Beijing Aizhixing Institute, Beijing, China;
JS5	Joint Submission 5: Yunnan Province Gejiu Huyangshu Self Help Group, Xiyi Institute of Cultural and Social Development, Kunming, China, Beijing Aizhixing Institute, Beijing China;
JS6	Joint Submission 6: Lawyers for lawyers (L4L) Amsterdam, The Netherlands, and Lawyers Rights Watch Canada (LRWC), Vancouver, BC, Canada;

- JS7 Joint Submission 7: Harm Reduction International (HRI) and International Network of People who Use Drugs (INPUD), London, United Kingdom
- JS8 Joint Submission 8: Privacy International (PI), London, United Kingdom, and the Law and Technology Centre of the University of Hong Kong (HKU), Hong Kong, China;
- JS9 Joint Submission 9: Front Line Defenders, Ireland and Chinese Urgent Action Working Group, Beijing, China;
- JS10 Joint Submission 10: Human Rights Law Foundation (HRLF), Washington, DC, United States of America, Falun Dafa Information Center (FDI), New York, United States of America, The Institute on Religion & Democracy (IRD), Washington DC, United States of America, Paul Marshall, Senior Fellow, Center for Religious Freedom, Hudson Institute, Thierry Bécourt, President of Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAPLC), Nantes, France, Greg Mitchell, President, The Mitchell Firm, Sue Taylor, National Affairs Office (Scientology), Union of Councils for Jews of the Former Soviet Union (UCSJ), Washington, DC, United States of America, United Macedonian Diaspora, Washington, D.C. United States of America;
- JS11 Joint Submission 11: International Federation for Human Rights (FIDH), Geneva, Switzerland, International Campaign for Tibet (ICT) Washington DC, United States of America;
- JS12 Joint Submission 12: International Environmental Law Project (IELP) at Lewis & Clark Law School, Portland, Oregon, United States of America, on behalf of:
Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP),
Center for Research & Development Zimbabwe (CDZIM);
and Southern Africa Resource Watch (SARW), South Africa;
- TWA Joint Submission: Tibetan Women's Association, India, Canada, North America, Europe, Dharamsala, India.
- ² The following abbreviations have been used for this document:
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty;
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT Optional Protocol to CAT;
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD;
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;
- ³ CASS-HRRC, submission part 2, para. 7.
⁴ HKA, para. 3.
⁵ JS9, para. 25, recommendation 7.
⁶ PHR, para. 18.
⁷ CUAWG, recommendation 12.
⁸ CHRD, pp. 5-6.
⁹ CSW, para. 4.
¹⁰ CSHRS, submission part 1, para. 2.
¹¹ CLS, para. 2.
¹² AI, p. 1.
¹³ AI, p. 1.
¹⁴ CSHRS, submission part 1, para. 5.
¹⁵ HKA, para. 3.
¹⁶ HRW, p. 1.
¹⁷ CASS-HRRC, submission part 2, para. 8.
¹⁸ CSW, para. 18.

- ¹⁹ CASS-HRRC, submission part 2, para. 9.
²⁰ RC, paras. 3, 9 and 10.
²¹ RC, paras. 5-6 and 11.
²² RC, para. 13.
²³ VPDF, p. 2.
²⁴ CFHRD, submission part 1, para. 11.
²⁵ CFHRD, submission part 1, para. 20.
²⁶ CFHRD, submission part 1, para. 21.
²⁷ BCLARC, para. 7. See also, LWU, recommendation, pp. 2-3.
²⁸ MOVPAZ, pp. 2-3.
²⁹ CSHRS, submission part 1, para. 6.
³⁰ CSHRS, submission part 1, para. 8.
³¹ CSW, para. 24.
³² HRW, p. 4.
³³ Article 19, Recommendations, p. 5.
³⁴ STFA, p. 2, recommendation 3.
³⁵ JS9, para. 25, recommendation 5.
³⁶ LFNKR, p. 1.
³⁷ HRIC, para. 4.
³⁸ FN, paras. 6 and 16.
³⁹ ITN, para. 36, recommendation ii. See also STFA, recommendation 1 and HRW, p. 4.
⁴⁰ LWU, p. 2.
⁴¹ CWRS, para. 12.
⁴² HK-Unison, para. 2.2.
⁴³ HK-Unison, paras. 4.6 and 3.2.
⁴⁴ JS2, para. 9.
⁴⁵ ACLA, submission part 1, para. 5.
⁴⁶ ACFTU, submission 2, paras. 5-9.
⁴⁷ SRI, para. 4.
⁴⁸ SRI, para. 25, recommendations 1 and 9.
⁴⁹ JS3, para. 1.7.
⁵⁰ JS4, pp. 5-6.
⁵¹ BAI, Summary and p. 1.
⁵² SRI, para. 25, recommendation 5.
⁵³ JS4, p. 4.
⁵⁴ ACWF, paras. 16 and 17.
⁵⁵ JS5, Summary, p.1 and Foreword, p. 2.
⁵⁶ JS7, Executive Summary, p. 1.
⁵⁷ AI, p. 2.
⁵⁸ HRIC, paras. 6-7.
⁵⁹ DHF, para. 14.
⁶⁰ DHF, para. 15. See also JS10, paras. 5.4.1 and 5.4.2.
⁶¹ DHF, para. 27.
⁶² HRW, p. 2.
⁶³ CHRD, p. 2.
⁶⁴ HRIC, para. 14.
⁶⁵ CHRD, p. 3.
⁶⁶ HRIC, para. 17.
⁶⁷ HRIC, para. 10.
⁶⁸ HRW, p. 3.
⁶⁹ CHRD, p. 2.
⁷⁰ JS9, para. 18.
⁷¹ CHRD, p. 3.
⁷² DHF, para. 10.
⁷³ HRW, p. 5.
⁷⁴ PHR, para. 14.
⁷⁵ GIEACPC, p. 1.

- 76 CPAPD, para. 11.
77 DHF, para. 20.
78 DHF, para. 28.
79 JS9, para. 20.
80 JS6, para. 11.
81 JS6, para. 8.
82 CHRLCG, paras. 1-2.
83 CUAWG, para. 2.
84 JS9, para. 24.
85 CHRLCG, paras. 45-46.
86 CLS, paras. 3 and 6.
87 ACLA, submission part 2, para. 3.
88 DHF, paras. 1 and 2.
89 DHF, para. 25.
90 HKA, para. 22.
91 JS8, Areas of concern, 4, on lack of transparency in the name of privacy.
92 JS8, pp. 9-10.
93 CRRC, para. 7. See also, CCCS, para. 8.
94 ECLJ, paras. 3-4.
95 HZDHRGN, pp. 2-3.
96 AI, p. 4.
97 HKJPC, paras. 1-2.
98 HKJPC, para. 6.
99 AI, p. 3.
100 CSW, para. 27.
101 JS10, para. 5.1.1.
102 JS10, para. 5.3.1.
103 STP, para. 5.
104 IFJ, p. 4.
105 ICPC, p. 1.
106 Article19, para. 7.
107 PEN-I, para. 25.
108 HKJA, para. 27.
109 RSF/RWB, p. 7, recommendations.
110 CIVICUS, para. 3.5.
111 JS9, para. 2.
112 CIVICUS, para. 4.4.
113 HRIC, para. 17.
114 JS2, para. 15. See also para. 17, recommendations.
115 CNIE, para. 3.
116 CPAPD, para. 12.
117 SRI, para. 25, recommendation 10.
118 PEN-I, para. 15 and 16.
119 RSF/RWB, p. 2.
120 ISC, pp. 1-2.
121 UPEC, para. 6.
122 UNJC, Section VI, para. 1.
123 CSHRS, submission part 2, para. 3.
124 CSHRS, submission part 2, para. 4.
125 CFHRD, submission part 2, para. 30.
126 Article19, p. 5, recommendations.
127 ACFTU, submission part 1, para. 6.
128 JS2, para. 1.
129 ACFTU, submission part 1, para. 7.
130 BZMW, para. 2.
131 CASS-HRRC, submission part 1, paras. 4-5.
132 ACFTU, submission part 2, para. 9. See also JS2, para. 14, recommendations.

- 133 HKCTU, p. 1.
134 HKCTU, p. 4.
135 OPSAAL, para. 1.
136 ACNU, para. 2.
137 CPAPD, para. 6.
138 CPAPD, paras. 7-9.
139 CCCS, para. 3.
140 CCCS, paras. 6-7
141 AI, p. 4.
142 FDC-Japan, pp. 1-2.
143 UAPCFEHD, pp. 2-3.
144 UAPCFEHD, p. 3.
145 AI, p. 5.
146 ACWF, paras. 13-14.
147 TWA, paras. 41 and 42.
148 TWA, paras. 8, 15-29.
149 PHR, para. 18.
150 BCLARC, para. 8.
151 ACLA, submission part 2, para. 6.
152 CEAIE, para. 12.
153 JS2, paras. 18 and 20.
154 PEN-I, paras. 17, 20, 21 and 24.
155 RPDCV, pp. 5-7.
156 CEMAFEE, paras. 2, 3, 7 and 8.
157 RPDCV, p. 3, part 3.
158 ISC, para. 5.
159 JS11, para. 10.
160 HRIC, para. 19.
161 HRIC, paras. 19 and 21.
162 HRIC, para. 19.
163 TWA, pp. 1-13, STFA, pp. 1-8, ITN, pp. 3-11, HRW, pp. 3-5. See also AI pp. 4-5, STP, para. 1.1 to 1.5, UNPO, pp. 1-5.
164 TW, p. 1.
165 CAPDTC, submission 1, para. 15. See also Annex 1, para. 3.
166 CAPDTC, submission 2, para. 8.
167 ITN, paras. 32 and 34.
168 ITN, paras. 29 and 30-32.
169 UNPO, para. 15.
170 AI, p. 4.
171 JS1, para. 1.
172 UNPO, para. 11. See also, paras. 10, 13-14 and recommendations, p. 5.
173 LFNKR, p. 2.
174 HRWF, p. 6.
175 HRW, p. 1.
176 ANEC, paras. 3 and 7.
177 CBDHDD, para. 5.
178 FMC, p. 1.
179 GSPGP, para. 3.
180 CFGS, para. 1.
181 CSPGP, para. 8.
182 JS12, paras. 1-2 and recommendation in para. 17.
183 HKHRC, part A.
184 HKHRM, para. 4.
185 HKJA, para. 39.
186 HKHRC, part C and part G, recommendations 6 and 8.